

China, el ascenso del lobo guerrero: capitalismo de Estado y nuevo imperialismo

La caracterización contemporánea de China como el mayor laboratorio mundial del desarrollo capitalista exige desmitificar el discurso oficial de tintes socializantes y comprender su evolución bajo un prisma teórico crítico. Lejos de constituir un régimen comunista o una dictadura del proletariado en la cual los trabajadores ejercen el control del Estado, el país se ha consolidado como una potencia económica plenamente capitalista que opera bajo la férrea lógica de la ley del valor, la explotación del trabajo vivo y la acumulación de capital. Su trayectoria ascendente comenzó con su inserción en la división internacional del trabajo a partir de los acuerdos históricos entre Mao Zedong y Richard Nixon, al superar progresivamente el modelo estatal previo —heredero de un capitalismo atrasado y dependiente de la Unión Soviética, marcado por altos costos e ineficiencias. Con su ingreso formal a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 2000, la nación asiática protagonizó una incorporación desaforada a las cadenas globales de valor: con rapidez transitó de ser un receptáculo de inversión extranjera por relocalización industrial y una plataforma de subcontratación para el gran capital occidental, a convertirse en la indiscutible locomotora de la economía mundial. Este dinamismo, caracterizado por tasas de crecimiento superiores a 10% durante décadas, ha desplazado el epicentro productivo del planeta desde el bloque de América del Norte hacia el Sudeste Asiático, lo que ha posicionado a China como la

segunda economía mundial y el principal contendiente de Estados Unidos por la hegemonía global.

Con el propósito de aprehender la naturaleza de este modelo, es crucial definirlo de forma teórica como un capitalismo de Estado, en el que el aparato público actúa como un capitalista colectivo en funciones: propietario, empresario y banquero a gran escala. Las dimensiones de ese control estatal son inéditas en el mapa global, toda vez que los activos del sector público equivalen a 150% de su producto interno bruto (PIB) anual —en contraste con el promedio de 50% en las potencias occidentales y 130% de Japón—, mientras que la inversión pública se sitúa de forma sostenida en 16%, superando drásticamente el exiguo 3% o 4% registrado en Estados Unidos o en el Reino Unido.

Sin embargo, como bien advirtieron Karl Marx y Friedrich Engels en sus críticas a la propiedad estatalizada dentro del modo de producción capitalista, la preeminencia de la propiedad estatal no representa en absoluto un embrión socialista ni una transición hacia éste, sino una modalidad de gestión de la acumulación. Históricamente, las formaciones posestalinistas y posmaoístas reservaron sectores estratégicos como las materias primas, la tecnología y el desarrollo militar al arbitrio estatal; al hacerlo, tales empresas públicas debían sustraerse de la *perecuación* general de la tasa de ganancia para evitar acelerar su tendencia decreciente, además de operar bajo la exigencia de capturar altos beneficios en el mercado mundial o absorber colosales recursos fiscales. Por tanto, las tensiones sistémicas de la China actual no reflejan una lucha entre un sector socialista y uno capitalista, sino encarnizadas querellas entre facciones del propio capital que coinciden en la imperiosa necesidad de dominar y explotar a la masa trabajadora.

Esta estructura económica se corresponde con un régimen político autoritario e hipercentralizado en el poder del Ejecutivo, la burocracia del Partido Comunista de China, el estamento militar y las élites empresariales. El sistema de partido único impone severas restricciones de control social a su población (cuya máxima expresión reciente fue la política de cero tolerancia frente a la pandemia) y da continuidad a una tradición represiva que en la era maoísta aplastó la disidencia y convirtió la Revolución Cultural en una calamidad social. El gobierno actual perpetúa esos mecanismos autoritarios mediante la opresión de minorías nacionales, la intolerancia a la crítica externa y la ejecución regular de purgas al interior de la casta dirigente para neutralizar la competencia política intramuros. Esta misma impronta autocrática se ha extendido al plano territorial mediante la asimilación forzada de Hong Kong, al suprimir el régimen parlamentario en favor de un control militarizado, y se proyecta de forma beligerante hacia la reanexión de Taiwán bajo la consigna de una sola China, configurando un estilo diplomático agresivo y nacionalista que en el nivel internacional le ha valido el apelativo de «diplomacia del lobo guerrero».

Frente a la paulatina transición demográfica y la necesidad de sostener su competitividad, el Estado chino lidera en la actualidad una profunda reconversión productiva enmarcada en la denominada Revolución Industrial 4.0, orientada a sustituir una fuerza laboral de base demográfica por una sustentada en la inteligencia artificial (IA) y la automatización avanzada. Así, China se ha convertido en el líder indiscutible de la robótica industrial, pues concentra más de 50% de la capacidad instalada del planeta con más de 1.5 millones de robots operativos en sus fábricas —el doble de la dotación existente en Europa— y acapara la mitad de las nuevas instalaciones robóticas anuales a escala global. El excedente económico es

canalizado de modo estratégico a través de la banca pública gracias a subvenciones estatales masivas y créditos preferenciales que blindan sus industrias de vanguardia, en especial en los sectores de vehículos eléctricos y tecnologías de transición energética como las placas solares, en un intento por erigir simultáneamente un poder militar impenetrable respaldado por un gasto armamentístico que, aunque eficiente al representar 2% de su PIB, busca consolidar una fortaleza de hierro defensiva.

Esta maduración del capitalismo de Estado ha empujado a China a desplegar políticas de corte netamente imperialista con el fin de exportar sus capitales excedentes y asegurar esferas de influencia global, por lo que la Iniciativa de la Franja y la Ruta constituye el eje articulador de dicha estrategia. A través de ese programa, el país se ha erigido como el principal acreedor del mundo en desarrollo, en particular en África y América Latina, ya que otorga créditos que ofrecen mayores facilidades inmediatas que los organismos multilaterales occidentales, pero exigen estrictas garantías soberanas; en caso de impago, estas cláusulas facultan a Pekín a proceder con el cobro por medio de la apropiación directa de materias primas o el usufructo y control de infraestructuras críticas (puertos, aeropuertos y redes ferroviarias). Tal comportamiento expansivo e imperialista de la potencia asiática, junto con sus cuestionados registros en materia de derechos humanos, se inserta en una larga continuidad histórica de disputas interimperiales, que emulan las lógicas de dominación política internacional por la captura de rentas, ganancias e intereses que las potencias occidentales y el imperialismo japonés ensayaron con violencia en los siglos XIX y XX a través de invasiones, ocupaciones coloniales y devastadoras guerras por delegación.

Bajo ese telón de fondo, la arquitectura geopolítica actual se encamina hacia una Segunda Guerra Fría que surge de las réplicas estructurales

de las crisis de 2008 y 2020, en la que el bloque emergente de los BRICS+ desafía de forma abierta la hegemonía del G7 liderado por Washington. A diferencia de la Primera Guerra Fría, que enfrentó a Estados Unidos con una Unión Soviética económicamente aislada y contenible, el antagonismo contemporáneo presenta a un rival chino profundamente integrado en el tejido del capitalismo mundial, cuyo marco ideológico tamiza el marxismo-leninismo a través del filtro confuciano y las reformas de Deng Xiaoping y Xi Jinping. Si bien este nuevo escenario reactiva la amenaza de un conflicto nuclear y reitera la dinámica de guerras indirectas en terceros países, la disputa se juega en un terreno de interdependencia económica donde las potencias occidentales despliegan agresivas medidas de contención geoeconómica. La estrategia norteamericana pretende quebrar las cadenas de producción en territorio chino con la imposición de aranceles punitivos, sanciones a empresas tecnológicas emblemáticas, el bloqueo del acceso a insumos críticos para la producción de semiconductores avanzados y el impulso global al *nearshoring* o relocalización industrial hacia naciones aliadas.

El asedio occidental coexiste con graves síntomas de crisis interna y contradicciones estructurales que amenazan la sostenibilidad del milagro económico chino desde su propio núcleo. El direccionamiento hipertrofiado de inversiones y subsidios ha propiciado una severa sobrecapacidad de producción que satura los mercados internacionales con una abundancia de mercancías baratas, lo que deprime la rentabilidad de numerosas corporaciones chinas que operan en números rojos y arrastra a la baja el valor de su mercado bursátil. La inundación de productos baratos amenaza con arruinar las industrias nacionales de los países receptores, por ende, se desata una oleada global de políticas proteccionistas y defensivas contra

las exportaciones de Pekín, al tiempo que el yuan experimenta presiones de depreciación. Asimismo, la economía doméstica enfrenta el estallido de una colosal crisis de sobreproducción inmobiliaria que se caracteriza por el impago crónico de constructoras e hipotecas, lo que suma un factor de vulnerabilidad financiera a un modelo que debe gestionar agudas desigualdades sociales y fracturas regionales mientras intenta sortear la trampa de los ingresos medios y la urgencia de su propia crisis ecológica. En ese escenario de transición global, las lógicas de los Estados imperialistas y del capital financiero se entreveran de forma indisoluble: se perfila una confrontación de largo aliento cuyo desenlace oscila entre la contención estadounidense, el relevo hegemónico asiático, o una catastrófica fractura militar de orden mundial.